JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C. Agosto diez de dos mil veintidós.

REF: TUTELA No. 1100131030272022-000268-00 DE NANCY ESTHER AYALA GOMEZ contra REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.

Se procede por el Despacho a decidir sobre la acción de tutela arriba referenciada con el siguiente estudio:

ANTECEDENTES.

La señora NANCY ESTHER AYALA GOMEZ acude a esta judicatura en nombre propio para solicitar se les proteja el derecho fundamental de petición que considera está siendo vulnerado por la entidad accionada.

En forma sintetizada se indica en los hechos que el 31 de agosto de 2016, ingreso legalmente a este país por el paso fronterizo de la ciudad de Cúcuta para radicarse en territorio Colombiano debido a la grave coyuntura socio política y económica que ha venido ocurriendo en la República Bolivariana de Venezuela donde nació. Que tomo esta decisión por cuanto su señora madre **DULCENOMBRE GOMEZ BARRAGAN** nacida en el corregimiento de Hato Viejo del Municipio de Calamar departamento de Bolívar es ciudadana Colombiana por derecho de nacimiento.

Que por esta razón procedió a realizar los tramites de identificación y nacionalización como ciudadana Colombiana teniendo en cuenta el derecho que le asiste como hija de ciudadana Colombiana.

Señala que el 7 de enero de 2017 junto con su señora madre se dirigió a la Notaria Primera de Bogotá, para obtener su registro civil de nacimiento el cual fue expedido en dicha notaria. Que para esa fecha no se exigía el código de verificación del proceso de apostillado de los documentos presentados que certificaran su nacimiento.

Dice que el 10 de enero de 2017 se dirigió a la sede de la Registraduría Nacional del Estado civil, de la sede Teusaquillo para realizar el proceso y tramite de la expedición de la cedula de ciudadanía Colombiana el cual fue expedido el 20 de enero de 2017 en la ciudad de Bogotá, por lo que se radico en Bogotá, proceso a realizar sus estudios obteniendo el titulo de bachiller académico en noviembre de 2020 que busco otras actividades, como acceso a la

salud y seguridad social, que procedió a registrar a su hija, a sacarle la tarjeta de identidad, procediendo a realizar sus actividades diarias normales, cumpliendo con todas las obligaciones adquiridas, derechos y deberes.

Indica que el 8 de octubre de 2021 que la Registraduría Nacional del Estado Civil, dicto un auto por medio del cual inicia una actuación administrativa tendiente a determinar la anulación de la inscripción de un registro civil de nacimiento y la consecuente cancelación de la cedula de ciudadanía por falsa identidad. y se daban diez días para que ejerciera su derecho presentando pruebas, pero que no la notificaron.

Que el 25 de noviembre de 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil, dicta una resolución por medio de la cual se anula el registro civil y la cancelación de la cedula de ciudadanía. Por falsa identidad. Acto que no le fue notificado y no pudo ejercer sus derechos.

Dice que para finales del mes de febrero de este año, se encuentra en un proceso de contratación laboral por intermedio de una bolsa de empleo para la empresa Bimbo tramite que se hizo sin inconvenientes hasta la fecha de la firma del contrato, ya que al establecer su estado en el sistema de salud y seguridad social en las diferentes plataformas empezaron a aparecer las novedades, por lo que se dirigió a la Eps a averiguar su situación y le informan que la cedula presenta una novedad ante la entidad accionada.

Indica que el 1º. De marzo de este año, se dirigió a la Registraduría donde se le informo que la cedula había sido cancelada y anulado el registro de nacimiento.

Refiere que el 13 de mayo de este año, presento una petición en la Registraduría Nacional del Estado Civil, solicitando el restablecimiento de su documentos de identificación y volvió a presentar toda la documentación requerida, que recibió respuesta de la Registraduría donde le dicen que es negado el derecho por extemporáneo sin tener en cuenta la falla sobre la notificación.

Solicita que a través de este mecanismo se le protejan los derechos fundamentales y se ordene a la Registraduría restablecer sus derechos fundamentales y se mantenga el consecutivo numérico que le fue asignado al registro civil y a la cedula.

Admitido el trámite mediante providencia de agosto 2 de 2022, se notificó la parte accionada dando respuesta así,

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Dice que en virtud de la presente acción constitucional, la Dirección Nacional de Registro Civil y la Dirección Nacional de Identificación, mediante Resolución No. 21026 del 02 de agosto de 2022, revoca parcialmente el citado acto administrativo.

Es decir, en otros términos, que la parte accionante cuenta con su registro civil de nacimiento en estado válido y cédula de ciudadanía en estado vigente. Dicha decisión fue debidamente notificada al accionante mediante correo electrónico enviado a la dirección que aportó en la presente acción de tutela.

Que Puestas de ese modo las cosas, se colige que en el presente caso se ha configurado una carencia actual de objeto por hecho superado, dado que, con ocasión del acto administrativo proferido, se ha satisfecho el fin de la acción constitucional y, por ende, cualquier pronunciamiento por parte del juez constitucional resulta a todas luces inane.

Solicita se declare la carencia actual de objeto por hecho superado.

CONSIDERACIONES:

De la Acción:

Respecto de la acción ejercida por el perjudicado el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia consagra que: toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

Competencia y Procedencia:

Es competente este Juzgado con fundamento en el Decreto 1382 de 2000 .

Del caso Concreto:

Concurren a esta judicatura la señora **NANCY ESTHER AYALA GOMEZ** para solicitar se le amparen los derechos fundamentales invocados y se ordene a la Registraduría del Estado

civil le restablezca sus derechos y conserve el consecutivo en sus documentos.

Con respecto al derecho de petición este se ha consagrado como un derecho fundamental, de conformidad con el artículo 23 de la Carta Política, estableciendo:

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución...”

Este derecho no implica que la resolución a darse sea favorable a lo solicitado, la obligación que le asiste a la Administración es dar una pronta resolución, para ello el legislador ha establecido unos términos en los cuales debe darse respuesta.

La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia.

La Corte Constitucional ha sostenido que el derecho de petición se materializa cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede, emite respuesta a lo pedido, *i)* respetando el término previsto para tal efecto; *ii)* de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera favorable o desfavorablemente a los intereses del peticionario; *iii)* en forma congruente frente a la petición elevada; y, *iv)* comunicándole al solicitante. Entonces, si emitida la contestación por el ente requerido, falla alguno de los tres presupuestos finales, se entenderá que la petición no ha sido atendida, conculcándose el derecho fundamental. En tal sentido, la Corte Constitucional ha explicado:

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna¹ a la petición elevada. Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Esto no excluye que además de responder de manera congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda ayudar a una información plena de la respuesta dada.

El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la persona que elevó la solicitud conoce su respuesta². Se hace necesario reiterar que no se considera como respuesta al derecho de petición aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el titular del derecho fundamental³.”

Como se dijo y se repite ahora, el objeto esencial de la acción de tutela es garantizar la efectiva e inmediata protección de los derechos fundamentales, amparo en el cual el juez, una vez analizado el caso particular, proferirá fallo en procura de la defensa de los derechos vulnerados; pero si la situación fáctica que generó la amenaza o vulneración ha sido superada, la decisión que dicte no tiene ninguna resonancia frente a la posible acción u omisión del acusado.

A este respecto la Corte Constitucional ha dicho:

“...la acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad de un mandato proferido por el juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada acude ante la autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de lo cual esa persona se queja ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío”.

De cara a lo solicitado en tutela, y teniendo en cuenta la respuesta dada por la parte accionada, y la prueba de haberse emitido la resolución No.21026 de agosto 2 de 2022, a través de la cual se revoca parcialmente la resolución 14533 del 25 de noviembre de 2021 y como consecuencia dejó valido el registro civil en la base de datos y vigente la cedula de ciudadanía en el archivo nacional de identificación.

Por consiguiente, y como el objeto de esta tutela, era que se le restablecieran los derechos a la accionante otorgándole los documentos con el consecutivo que traía, y como la Registraduría, revoco la resolución que había dictado anulando los documentos y dispuso la validez del registro civil y la vigencia de la cedula, por consiguiente el objeto de la tutela desapareció, y por ende se da la figura del hecho superado.

En consecuencia el amparo solicitado no tiene prosperidad.

Por lo expuesto, el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá D.C. Administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

Primero: Negar la acción de tutela aquí promovida por **NANCY ESTHER AYALA GOMEZ** contra **REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**, por hecho superado.

Segundo: Notifíquesele a las partes este fallo por el medio más expedito.

Tercero: Envíese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión en caso de no ser impugnado.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

La Juez.

MARIA EUGENIA FAJARDO CASALLAS.

Firmado Por:
Maria Eugenia Fajardo Casallas
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 027 Escritural
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **85d72b6d7d1ebb4824c00cbf91d9bf9e95cd5f9b33a8ea2e06923e74d3a0383e**

Documento generado en 10/08/2022 08:46:01 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>